**CASO MARÍA ELENA QUISPE Y MÓNICA QUISPE
Vs. REPÚBLICA DE NAIRA**

REPRESENTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

I.

INDICE

I.	INDICE.....	2
II.	ACRÓNIMOS Y SIGLAS.....	5
III.	BIBLIOGRAFIA.....	7
1.	Tratados, convenciones y protocolos de ámbito internacional.....	7
2.	Libros, artículos de revistas especializadas, caso hipotético e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	8
3.	Sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.....	9
4.	Corte Europea de Derechos Humanos y derechos fundamentales y el Tribunal Internacional de Justicia o de la Haya.....	11
IV.	EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS.....	11
1.	Línea del tiempo en el caso <i>Mónica y María Elena Quispe Vs. República de Naira</i>.....	11
1.1.	Etapas en las que se desarrolla la plataforma fáctica y sus efectos dañosos en la población y en personas particulares.....	11
1.1.1.	La ONG Killapura en sus informes documenta y litiga casos de violencia de género y violencia sexual, en particular contra <i>Mónica Quispe y María Elena Quispe</i>	12
1.1.2.	El Estado Monista de Naira, expide normas de género incompletas e inaplicables en el derecho interno y ratifica normas del derecho Convencional internacional.....	13

1.1.3. Violencia estatal de género reiterada contra María Elena Quispe, con efectos perjudiciales para su familia e hijo.....	14
1.1.4. Generalización de la violencia de género y violación sexual en la Provincia de Warmi, República de Naira: caso hito el de Mónica y María Elena Quispe.....	15
1.1.5. La ONG Killapura denuncia y solicita investigaciones de contexto sobre violencia de género y violencia sexual en Warmi, pero son desatendidas por Naira, bajo criterios de prescripción en el derecho Interno e inobservado el bloque de convencionalidad del Derecho Internacional.....	17
V. ANÁLISIS LEGAL DEL CASO.....	19
A. COMPETENCIA DE LA CORTE IDH.....	19
B. IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN “RATIONE TEMPORIS”.....	19
C. ASPECTOS DE FONDO.....	21
C.1. Violación del derecho a la vida: Femicidios en sucesos de contexto en Naira y la tentativa de femicidio, en perjuicio de María Elena Quispe.....	21
C.2. Derecho a la integridad personal (Artículo 5, Convención) de las hermanas Quispe y la Obligación del Estado de Naira a garantizar los derechos y obligaciones contenidas en la CIPST (Artículos 1, 6 y 8) y en conexión con el artículo 7 de la Convención Belém do Pará.....	23
C.3. Prohibición a la esclavitud y servidumbre como derecho convencional (Artículo 6) desconocido por Naira, pues aún en “Estados de emergencia” el derecho es inderogable.....	25

C.4. Privación de la Libertad (artículo 7, Convención) de las hermanas Quispe con falsas acusaciones. La prescripción de la acción penal para desconocer el acceso a la justicia convencionalmente es inocua, cuando hay violación grave de Derechos Humanos.....	26
C.5. En el caso Quispe se han violados los derechos convencionales (artículos 8 y 25) del debido proceso penal, investigación imparcial, eficaz e idónea y de juzgamiento de los responsables agentes del Estado y del particular Jorge Pérez, ex pareja de María Elena Quispe. Así mismo, por suspender derechos convencionales en “Estado de emergencia” en contravía del artículo 27.2 y 25 de la Convención.....	27
C.6. Violación del artículo 7 de la Convención Belém Do Pará en relación con el artículo 1.1., de la Convención: Violencia selectiva, generalizada y de contexto contra la Mujer en Naira por sus agentes y no agentes.....	31
VI. REPARACIONES (Art. 63.1 de la Convención).....	34
A. Víctimas lesionadas: Indígenas María Elena y Mónica Quispe.....	34
B. Obligación de investigar la tentativa de feminicidio de María Elena Quispe y de violencia sexual de las hermanas Quispe.....	34
C. Rehabilitación de las víctimas de tortura en la modalidad de violencia sexual, Vejámenes, privaciones de ilegales de la libertad, tratos degradantes e inhumanos. Aplicación del Protocolo de Estambul.....	35
D. Reparación “ <i>per se</i> ” de la sentencia que se profiera por la Corte.....	36
E. Garantías de justicia, reparación, no repetición y de no revictimización de las V.N., y sus familiares.....	36

F. Indemnización compensatoria a las víctimas María Elena y Mónica Quispe.....	38
F.1. Daño material.....	38
F.2. Daño inmaterial.....	38
VII. PETITORIO.....	39
A. Solicitamos, respetuosamente la Responsabilidad del Estado de Naira, por vulneración del Derecho Convencional y las normas del Derecho Internacional, precisadas en el punto V, del análisis legal del caso.....	39
B. Incorporación al petitorio de las reparaciones solicitadas en el punto VI.....	40

II.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS

Ab initio (Ab., in)	Al inicio, inicialmente, en principio
A posteriori (A., pos)	Posteriormente, después
Art.	Artículo
BME	Bases Militares Especiales de Naira
CEDAW	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. 1979
CADH	Convención Americana de Derechos Humanos. 1959
CEDH	Convención Europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 1950
C.D.N.	Constitución de la República Democrática de Naira
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1969-1978

CIPST	Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura. 1985
CIPSEVM	Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Belén do Pará. 1994
Corte IDH. Corte.	Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mayo de 1979
CV	Comisión de la Verdad del Estado de Naira. 2015
CVDT	Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 1969-1980
Estado. Naira.	Estado o República Monista y Democrática de Naira
E.H.	Exposición de los hechos
GTV	Canal de Televisión de Naira
INE.	Instituto Nacional de Estadística
ION.	Instituto de Opinión Nacional
LGTBI.	Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales
Núm.	Numeral
ONG. Killapura.	Organización No Gubernamental de Killapura. 1980-2016
PTCVG	Política de Tolerancia Cero a la violencia de Género de Naira. 2015
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 1950
V.N.	Víctimas del Estado de Naira

III.

BIBLIOGRAFIA

1. TRATADOS, CONVENCIONES Y PROTOCOLOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL

AA.VV. *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer*. CEDAW 1979. En: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

AA.VV. *Convención Americana sobre Derechos Humanos*. CADH. San José de Costa Rica del 7 al 22 de Noviembre de 1969. En: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

AA.VV. *Convención Europea para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales*. CEDH. Noviembre 4 de 1950. En: <http://www.echr.coe.int/Documents/>

AA.VV. *Constitución de la República Democrática de Naira*. C.D.N.

AA.VV. *Comisión Interamericana de Derechos Humanos*. CIDH. 1959. En: <https://www.oas.org/ipsp/>

AA.VV. *Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura*. CIPST. Diciembre 9 de 1985. En: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/>

AA.VV. *Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer*. Convención Belén Du Pará. Junio 9 de 1994. En: <http://www.oas.org/juridico/>

AA.VV. *Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados*. CVDT. Mayo 23 de 1969. Vigente enero 27 de 1980. En: http://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/

AA.VV. *Protocolo de Estambul*. Manual de Investigación y Documentación efectiva sobre la Tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. New York y Ginebra. 2004

2. LIBROS, ARTICULOS DE REVISTAS ESPECIALIZADAS, CASO HIPOTÉTICO E INFORMES DE LA CIDH.

AA.VV. *Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.*

Oficina del Alto Comisionado. En: <http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>

AA.VV. *Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19* Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Julio 26 de 2017

AA.VV. *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.* The Secretary General of the Council of Europe. 12 April, 2011

AA.VV. *Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación.* Comisión interamericana de derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II. 2011.

AA.VV. *Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual: la educación y la salud.* Comisión interamericana de derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II. 2011.

AA.VV. Informe No. 4/16, Caso 12.690, Fondo, *V.R.P y V.P.C, Nicaragua*, 13 de abril de 2016

AA.VV. Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. *Mariana Selvas Gómez y otras. México.* 28 octubre 2015.

AA.VV. Informe No 53/01. Case 11.565. Ana, Beatriz y Celia González Pérez. México. 4 de abril de 2001.

MANTILLA F., Julissa. *Caso María Elena Quispe y Mónica Quispe v. República de Naira.*
En: <https://www.wcl.american.edu/>

3. SENTENCIAS Y OPINIONES CONSULTIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

- 1) *Favela Nova Brasília Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017.
- 2) *Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017.
- 3) *Flor Freire Vs. Ecuador*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016.
- 4) *Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016.
- 5) *De la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de Octubre de 2016.
- 6) *García Ibarra y otros Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015.
- 7) Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289.
- 8) *J. Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013
- 9) *Fernández Ortega y otros Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010.
- 10) *Rosendo Cantú y otra Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010.

- 11) *Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.
- 12) *Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.
- 13) *González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
- 14) *Radilla Pacheco Vs. México*, Sentencia de 23 de Noviembre de 2009
- 15) *Del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008.
- 16) *De la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007.
- 17) *Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador*. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007.
- 18) *La Cantuta Vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007.
- 19) *La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006.
- 20) *Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.
- 21) *Del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
- 22) *Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003.

23) *Blake Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998.

24) Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987.

4. CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Case of Opuz v. Turkey. European Court of human Rights. Third Section Judgment. Strasbourg. 9 June 2009.

Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, *Caso España Vs. Bélgica*. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Sentencia de 5 de febrero de 1970

IV.

EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

1. Línea del tiempo en el caso Mónica y María Elena Quispe Vs. República de Naira

1.1. Etapas en las que se desarrolla la plataforma fáctica y sus efectos dañosos en la población y en personas particulares

1. Los hechos del presente caso, se desarrollan en el contexto de tres etapas de tiempo: 1970 a 1979; 1980 a 1998 y 1999 a 2016. En la primera etapa, en la República de Naira, un “Estado Democrático con 20 millones de habitantes dividido en 25 provincias”, con cierta estabilidad económica, “desde hace varios años atraviesa una crisis política que ha afectado los últimos tres gobiernos” y en ese ámbito, acaecen hechos de violencia generalizada y enfrentamientos con el grupo narco-armado “Brigadas por la Libertad” (BPL), el cual sembró terror y zozobra, sin que

el Estado interfiriera en dichas sus actividades. Insucesos que se acentuaron en el sur del país, en particular en las provincias de Soncco, Killki y Warmi.

2. En la segunda etapa entre 1980 y 1999, el Presidente Juan Antonio Morales decretó el estado de emergencia, la suspensión de garantías, derechos y libertades constitucionales. Conformó Comando Políticos y judiciales en las provincias mencionadas, con el fin de frenar esas actividades de terror y zozobra en la población. Para ello, instaló varias Bases Militares Especiales (BME), principalmente en Warmi.

1.1.1. La ONG Killapura en sus informes documenta y litiga casos de violencia de género y violencia sexual, en particular contra Mónica y María Elena Quispe

3. La ONG Killapura fundada en 1980, ha documentado y litigado casos de violencia de género. En los informes nacionales de Killapura, sostiene que el Estado de Naira, no emplea medidas y efectivos controles, a favor de las víctimas de violencia de género, lo cual redundo en una discriminación generalizada y con graves repercusiones en el tiempo.

4. En la provincia de Warmi donde nacieron Mónica y María Elena Quispe, entre los años 1990 a 1999, se creó la Base Militar Especial (BME), con el propósito de controlar la zona y combatir el crimen organizado. Sin embargo, en esos años los oficiales de la BME, cometieron abusos contra la población incluidos casos de violencia sexual permanente contra las mujeres y las niñas, entre ellas, Mónica y María Elena de 12 y 15 años respectivamente.

5. En 1999 Naira presuntamente controla la situación de violencia y terror generalizado y consigue el rendimiento de los grupos armados. Las BME fueron desactivadas y por supuesto, se levantó el Estado de Emergencia y la suspensión de derechos y garantías constitucionales, aunque los hechos de violencia sexual no se denunciaron por las víctimas ni mucho menos investigados *ex officio* por el Estado, muy a pesar de que Killapura sí lo hizo desde 1980 y a

posteriori Mónica Quispe en 2014 lo develó públicamente en el Canal TGV, como se expone en el numeral 12 de ésta Exposición de Hechos (en adelante E.H).

1.1.2. El Estado Monista de Naira, expide normas de género incompletas e inaplicables en el derecho interno y ratifica normas del derecho convencional internacional

6. En la tercera etapa entre 1999 a 2016, el Estado Monista de Naira, con anterioridad había ratificado todos los tratados internacionales, incluyendo el CEDAW, la Convención Americana de Derechos Humanos, La Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención de Belém do Pará. Correlativamente, había expedido la Ley 25253 contra la violencia de la mujer y el grupo familiar y la ley 19198, contra el Acoso callejero. El Código Penal instituye el delito de feminicidio y violencia sexual. Naira no despenaliza la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, no se reconoce el matrimonio igualitario ni la adopción de parejas homosexuales. Tampoco tiene una Ley de identidad de género.

7. En 2010, fue asesinada y enterrada en un descampado, la mujer transgénero Zuleimy Pareja a manos de su conviviente Angelino Mendoza, luego de haber denunciado por años la violencia sufrida por aquella. La fiscalía denunció a aquél señor por feminicidio y pidió la pena máxima de prisión de 40 años. Sin embargo, la Sala Primera Penal, al analizar que Zuleimy, quirúrgicamente no había cambiado de sexo y en su documento de identidad figuraba con un nombre de hombre, condenó a Mendoza por homicidio a 15 años por un “crimen pasional”, por la infidelidad de Zuleimy. La Corte Suprema ratificó la condena inicial.

1.1.3. Violencia estatal de género reiterada contra María Elena Quispe, con efectos perjudiciales para su familia e hijo

8. El 20 de Enero de 2014, la señora María Elena Quispe denunció en la Policía a su esposo Jorge Pérez por “haberla desfigurado con el pico de una botella”. El médico legista no pudo hacerle el examen respectivo. En Naira la ley 25253 impone a la Policía acciones urgentes de protección a las víctimas, que no se ejecutaron, por falta del certificado médico y el “atestado policial” por tanto, la fiscalía no pudo formular denuncia y el agresor no fue detenido.

9. En mayo, la señora Quispe fue interceptada en la calle por el señor Pérez quien la insultó y golpeo. En el contexto de un gran debate nacional sobre la violencia de género, Pérez fue detenido y sometido a juicio. Se le condenó a un año de prisión suspendida debido a que no tenía antecedentes de violencia y el médico legista había calificado la agresión como de lesiones leves. En Agosto, el señor Pérez fue al sitio de trabajo de la señora Quispe y la volvió a golpear, ocasionándole una “*hemiplejia derecha*” (invalidez parcial permanente), por lo que fue nuevamente detenido.

10. En Mayo de 2014, Mónica Quispe, hermana de María Elena, interpuso la denuncia “*por tentativa de feminicidio*” contra el señor Pérez, pero hasta la actualidad el proceso judicial sigue pendiente. Mónica ha asumido la crianza y custodia del hijo de María Elena. El señor Pérez ha iniciado proceso de custodia del hijo, arguyendo el deterioro de la salud de María Elena y por estar arrepentido de lo acaecido y sobre todo al haberse sometido a un tratamiento psicológico de rehabilitación por bien del niño, a fin de que le devuelvan a su custodia. El Juez de familia en 1ª Instancia, falla a favor de Pérez, argumentando el vínculo de padre e hijo y darle poca importancia a la violencia de pareja.

11. El Presidente Gonzalo Benavente, líder del Partido Reforma Democrática elegido en abril de 2014, por tres años. En su campaña electoral, prometió reformas normativas y programas de gobierno que busquen la inclusión y el mejoramiento de los grupos vulnerables. Sin embargo,

esas promesas enfrentan una oposición en el poder legislativo, por parte de grupos políticos radicales que no quieren reformas normativas. El partido “Respeto a mis hijos”, considera que hay una crisis de valores debido a dichas reformas, amparados en que tienen “una visión adecuada de la familia”. Así han logrado paralizar la incorporación de la perspectiva de género al currículo nacional de Educación, la que consideran un peligro para “los valores tradicionales de la Sociedad de Naira” y así la V.N., vuelven a quedar desprotegidas.

1.1.4. Generalización de la violencia de género y violación sexual en la Provincia de Warmi, República de Naira: caso hito el de Mónica y María Elena Quispe

12. En Diciembre de 2014, el canal GTV de Naira, decide entrevistar a Mónica Quispe, a fin de conocer a profundidad la vida de María Elena y el contexto familiar. Mónica describió las circunstancias difíciles de vida de su hermana desde aquella época en que se instaló la Base Militar Especial (BME) en Warmi entre 1990 y 1999. Mónica comentó que en Marzo de 1992, cuando ella y su hermana eran menores de edad de 12 y 15 años, respectivamente. Fueron recluidas en la BME con acusaciones falsas (por supuestamente apoyar a los movimientos armados de Naira) por un mes, siendo obligadas a lavar, cocinar y limpiar diariamente. En ese contexto, los soldados en más de una ocasión y muchas veces de manera colectiva sometieron a las V.N. a “*desnudos forzados, tocamientos indebidos, tentativas de violación y violación sexual*” y más aún fueron lesionadas gravemente en las celdas de la BME.

13. Un día después del reportaje televisivo, Killapura se comunicó con las hermanas Quispe y decidió asumir su caso. En la conversación privada, las hermanas Quispe se ratificaron en todas sus declaraciones.

14. Las Autoridades de Warmi, días después del reportaje, emitieron un pronunciamiento público negando los hechos, diciendo que nunca hubieran permitido una situación de esa

naturaleza en su comunidad y que GTV y Killapura estaban “*desprestigiando al pueblo*”. Vecinos y vecinas del poblado, inexplicable y paradójicamente respaldaron a las Autoridades de Warmi.

15. El 7 de enero de 2015, desaparece la estudiante de 19 años Analía Sarmiento, al salir de una discoteca y su cuerpo apareció dos días después en un botadero de basura. Su asesino, Guillermo Alcázar, era un hombre que había conocido en la discoteca y había bailado con ella. Según los testigos, Alcázar la obligó a entrar a su auto, donde la violó y asesino. Alcázar anteriormente tenía dos acusaciones y una condena por violación sexual, pero se hallaba con libertad condicional, según el artículo 65 del Código Penal de Naira.

16. El Estado ante este caso, toma medidas inmediatas y concretas para contrarrestar la situación. Estas medidas se agrupan en la denominada “*Política Cero a la violencia de Género*” (PTCVG, febrero 1 de 2015) y se asigna una partida presupuestal, sin mecanismos de verificación y efectiva puesta en marcha. La sociedad civil, las organizaciones de mujeres y las asociaciones de V.N., las recibe de buen modo y hacen sus propuestas para el diseño final de la PTCVG, pero esto se queda en la propuesta estatal de papel.

17. Igualmente, el Estado decide crear una Unidad de Violencia de Género en la Fiscalía y en el poder judicial con medidas específicas de atención para las mujeres víctimas, además de Capacitación y formación obligatoria para los jueces, fiscales y demás funcionarios y funcionarias. Extiende la facultad de esta unidad para sancionar a representantes públicos que cometan acto de violencia de género y discriminación, pero esto aún no se implementa en Naira.

1.1.5. La ONG Killapura denuncia y solicita investigaciones de contexto sobre violencia de género y violencia sexual en Warmi, pero son desatendidas por Naira, bajo criterios de prescripción en el derecho interno e inobservando el bloque de convencionalidad del derecho internacional

18. El 10 de Marzo de 2015, la ONG Killapura, luego de realizar una investigación minuciosa en el caso de las hermanas Quispe, que incluyó entrevistas a vecinos, víctimas y testigos de Warmi, interpuso las denuncias respectivas por violencia sexual, pero estas no fueron tramitadas debido a que el plazo de prescripción de 15 años ha pasado. Ante esto, Killapura emplazó al Gobierno a que se manifieste y tome las medidas necesarias para permitir la judicialización en el presente caso, pues el Estado no debe limitarse al caso de las señoras Quispe sino que debía iniciar una investigación general y de contexto que permita garantizar los derechos de las demás víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y no repetición o re-victimización. Deberá establecerse además, medidas de reparación para las mujeres y los hijos que pudieran haber nacido producto de esas violaciones sexuales.

19. El 15 de Marzo de 2015, el Gobierno de Naira responde que no le corresponde interferir en los procesos judiciales pero creará un Comité de Alto Nivel para explorar la posible reapertura de los casos penales. Igualmente, sostiene que incluirá el caso Quispe en el PTCVG, haciendo adaptaciones necesarias para garantizar sus derechos, disponiendo la creación de una “*Comisión de la Verdad*” compuesta por representantes del Estado y de la Sociedad Civil, la cual asumirá con urgencia la investigación de los hechos. El Presidente Benavente hace el anuncio de estas medidas en los medios, rodeado de su Consejo de Ministros, comprometiéndose a conocer la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Sin embargo, a la fecha no se ha puesto en funcionamiento dicha Comisión.

20. El Estado, respecto a los hijos nacidos de la violencia sexual, sostiene que dispondrá de una inscripción inmediata en el Registro Público del PTCVG, pero a la fecha no ha iniciado.

21. La ONG Killapura, considera que las anteriores medidas estatales no satisfacen de manera adecuada los derechos de sus representadas ya que el caso de las señoras Quispe no corresponde a un proceso cotidiano de violencia de género sino que tiene implicaciones mayores debido a la posible masividad de los hechos en Warmi y de la generalidad de la violencia sexual ese lugar, cuyas diversas manifestaciones no están recogidas en la legislación vigente. Agrega, que según la Convención Belém do Pará, los Estados tienen la obligación de judicializar los hechos de violencia contra las mujeres; considera una necesidad urgente, la incorporación del enfoque de género en el currículo nacional de educación al igual que las reformas legales para garantizar la situación de las V.N., y la custodia de sus hijos.

22. El Observatorio del delito del Ministerio Público afirma que cada mes hay 10 feminicidios o tentativas de feminicidio en el país y que cada dos horas una mujer sufre violencia sexual en Naira. Según el INE, 3 de cada 5 mujeres sufrieron agresiones por parte de sus parejas o ex parejas en el 2016. En 2015 dieron a luz 1.300 niñas de entre 11 y 14 años y 3.000 de 15 años. El ION informa, además que 7 de cada 10 mujeres entre los 15 y 35 años han sufrido casos de acoso sexual callejero diariamente a lo largo de su vida. De otro lado, los crímenes de odio contra la población LGTBI han aumentado en los últimos años, habiéndose registrado 25 asesinatos contra aquellos entre 2014 y la actualidad.

V.

ANÁLISIS LEGAL DEL CASO

A. COMPETENCIA

23. La República Monista de Naira (en adelante “Naira” o “Estado”), es Estado Parte de *la Convención Americana de Derechos Humanos* (en adelante “La Convención”) desde 1979 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH o “Corte”) esa misma fecha. El Estado también es parte *la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer* (en adelante CEDAW) desde 1981; en la *Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura* (En adelante CIPST) desde 1 de Enero 1992; en la *Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer* (en adelante “Convención de Belém do Pará”) desde 1996. En consecuencia, la Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana y de las respectivas disposiciones de los otros tratados interamericanos cuyo incumplimiento se alega.

**B. IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN “RATIONE TEMPORIS”
PROPUESTA POR NAIRA**

24. Naira admitió competencia contenciosa de la Corte desde 1979. Los hechos probados y en contexto histórico y de investigación de Naira, se verifican en tres etapas del tiempo: 1970 a 1979, 1980 a 1998 y 1999 a 2016, como *ut supra* se precisó. Los grupos narcoguerrilleros BLP., cometieron actos terroristas “sin interferencia [o actividad omisiva] del Estado” en las provincias de Soncco, Killki y Warmi, entre 1970 a 1998, incluidos los actos de violencia sexual, violencia de género, tortura y otros vejámenes contra las niñas, mujeres y grupos LGTBI, documentados y denunciados por Killapura desde 1980 (núm. 3º de la E.H) y en el caso hito o emblemático

acaecido a María Elena y Mónica Quispe en marzo 1992 en la BME (núm. 12 E.H.) realizados por agentes del Estado y no agentes del Estado –particulares– (núm. 8º y 9º E.H.) en enero y mayo de 2014. Por lo que no existe sombra de duda de la Competencia *temporis* de la Corte desde 1979 en el caso *sub examine*, pues por el principio de la “*compétence de la compétence*”, la Corte ha manifestado que “*no puede dejar a la voluntad de los Estados que éstos determinen cuáles hechos se encuentran excluidos de su competencia. Esta determinación es un deber que corresponde al Tribunal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales*”¹; más aún, según el artículo 9 de la Convención y en concordancia con el artículo 28 del Tratado de Viena sobre el derecho de los Tratados de 1969² estos se aplicaran como un *corpus iuris* en el Estado Parte desde la fecha de ratificación, “*salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo*”. El artículo 22 de la Constitución de Naira ratifica que “*los tratados debidamente ratificados son directamente aplicables por los Tribunales y cuentan con un rango constitucional superior a la leyes nacionales*”, de lo cual se infiere que no existen reservas o limitaciones a la aplicabilidad del sistema interamericano en Naira y por tanto, *a priori* los Derechos Humanos previstos en la Convención rigen y se aplican en forma general y con efectos *erga omnes* a los Estados Partes y *a posteriori* encuentran regulaciones Convenciones especiales, que potencian y refuerzan la garantía y protección de esos derechos convencionales, sin excluirlos por la especialidad, pues el derecho de prohibición a los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la violencia de género y sexual y toda forma de discriminación a la mujer, no solo son objeto de garantía y protección de los Estados, agentes y particulares desde que se expidieron dichas Convenciones específicas como la Convención Belém do Pará (1996),

¹ *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154; párr. 45.

² *Cfr.*, Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100., párr. 117 y 118; Corte IDH. *Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219; párr. 15 y 16

CEDAW (1981), CIPTS (Enero 1 de 1992), Estatuto de Roma de 1998; entre otros, sino desde la ratificación de la Convención Americana, que en el caso *sub examine*, comenzó en 1979.

25. Ahora bien, según la plataforma fáctica, en las tres etapas del tiempo en Naira, se verifican “*crímenes de Estado*” y cometidos por personas particulares, tales como: la privación ilegal y arbitraria de la libertad, desapariciones y discriminación, graves violaciones de derechos humanos: los vejámenes, torturas, tratos inhumanos y degradantes, de violencia de género o de violación sexual, en perjuicio de las hermanas Quispe y de las mujeres de la población de Warmi; entonces, esos “*actos de carácter continuo o permanente se extienden durante todo el tiempo en el cual el hecho continúa, manteniéndose su falta de conformidad con la obligación internacional*”³ y por tanto, siguen siendo de competencia de la Corte y en consecuencia es infundada la excepción *ratione temporis* propuesta por Naira y así lo sentenciará la Corte.

C. ASPECTOS DE FONDO

C.1. Violación del derecho a la vida (artículo 4): Femicidios en sucesos de contexto en Naira y la tentativa de femicidio, en perjuicio de María Elena Quispe.

26. El artículo 4.1 de la Convención garantiza y protege el derecho a la vida de las personas, a cargo de los Estados Parte. Sin embargo, el Ministerio Público y el INA de Naira, según el núm. 22 E.H., presenta estadísticas mensuales relevantes y numerosas durante los años 2014 a 2016 de femicidios y tentativa de femicidios, violaciones sexuales contra mujeres, niñas y población LGTBI, a manos de sus parejas o ex parejas, como le sucedió a Analía Sarmiento (párr. 15° de la E.H.), asesinada por Guillermo Alcázar y a María Elena Quispe, agredida física y psicológicamente por Jorge Pérez, (párrs. 8° y 9° de la E.H). En ambos casos las investigaciones y juzgamiento no culminaron sentencias judiciales. Femicidios, según el

³ Cfr., Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo*. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 155 a 157.

artículo 34 C, numeral 3º y 4º del Código Penal de Naira y Agravado, según la causal 1ª y 4ª del mismo artículo y Código y tentativas de feminicidio, *“influenciadas por una cultura de discriminación contra la mujer basada en la concepción errónea de su inferioridad”* y se presentan en el contexto de discriminación sistemática contra la mujer basada en género⁴. Precisamente la ONG Killapura desde 1980 ha litigado casos de violencia de género en Naira y denunció el caso de las hermanas Quispe en Marzo de 2015 (párr. 3º, 19º y 21º de la E.H), sin que el Estado iniciara investigaciones en general y de contexto, incluido el caso de las hermanas Quispe, ni menos se esclareciera los hechos y se condenara a los responsables de atrocidades mortales, sexuales y de tortura.

27. Desde 1992 el CEDAW estableció la responsabilidad de los Estados Parte, como Naira *“por actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”*⁵. Visión ratificada por Declaraciones de la ONU de 1993 y en la Convención Belém Do Pará. Más aún, el Estado de Naira estaba en la obligación de cumplir con su deber de prevenir la violación de derechos humanos, en particular el de la vida e integridad personal de las víctimas de feminicidio y las tentativas de feminicidio que en contexto se venían presentando en Naira, décadas atrás, incumpliendo así el deber estatal ineludible⁶, pese a existir normas y códigos dirigidos a prevenir la violencia generalizada y de género, pero no es suficiente con que exista un cuadro normativo, *“sino también garantizar la aplicación efectiva y la práctica de*

⁴ Cfr., Corte IDH. *Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205., párr. 132 y 133

⁵ *Ibidem*, párr. 254 y en el párr. 255, cita la Responsabilidad del Estado por *“Violencia Doméstica”* prevista en el Caso María Da Penha Vs. Brasil (2000)

⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párrs. 137 a 140.

cumplimiento”⁷. Más aún, en el Sistema Interamericano desde 1994 existe la figura del *Relator Especial* que hace el seguimiento a las causas y consecuencias de la violencia contra la Mujer y eso fue desconocido también por Naira al no entregar la información requerida oportunamente⁸.

C.2. Derecho a la integridad personal (Art. 5, de la Convención) de las hermanas Quispe y la Obligación del Estado de Naira a garantizar los derechos y obligaciones contenidas en la CIPST (Arts. 1, 6 y 8) y en conexión con el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará

28. Conforme a los hechos probados 3 a 6 y 12 de la E.H., se presentaron varios actos de violencia de género, violencia sexual, vejámenes por parte de agentes del Estado (Militares de las BME) y de particulares, en perjuicio de mujeres, niñas, grupo LGTBI y en particular a María Elena y Mónica Quispe. Las declaraciones rendidas por las V.N. (hechos 10,12 y 13) y la ausencia de investigar estos actos y hechos de tortura por parte del Estado, que era su obligación internacional hacerlo⁹, son indicativos de la generalización en Naira¹⁰. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, se está frente a un acto constitutivo de “tortura” cuando el maltrato: a) sea intencional; b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito¹¹. *In fine*, se solicitará, la aplicación del Protocolo de Estambul a favor de Mónica y María Elena Quispe, porque los actos de tortura que soportaron en la BME, se encasilla en lo expuesto por la Corte, máxime que “*la prohibición de la violencia por razón de género contra la mujer ha pasado a ser un principio del derecho internacional consuetudinario*”, según la Recomendación General Núm. 35 del CEDAW.

⁷ Cfr. *Case of Opuz v. Turkey*. European Court of human Rights. Third Section Judgment. Strasbourg. 9 June 2009, párr. 127

⁸ *Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*. Oficina del Alto Comisionado. En: <http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx>

⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 126 a 127

¹⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. párrs. 107 a 110

¹¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316, párr. 87

29. La Corte considera que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales¹²; más aún, la CIDH ha calificado la prohibición de la tortura como una norma de *jus cogens*¹³, cuyos efectos devastadores en la mujer se extienden al derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido y de las actuaciones y omisiones estatales, frente a los hechos¹⁴, tal como se sostiene en el numeral 20 de la E.H., para el hijo de María Elena.

30. La CIDH ha establecido de forma consistente que la violación sexual cometida por miembros de las fuerzas de seguridad constituye en todos los casos una grave violación de los derechos humanos protegidos en los artículos 5 y 11 de la Convención¹⁵. Dicha conducta ilegal presupone un sufrimiento físico y mental severo y duradero, debido a su naturaleza no consensual e invasiva y que afecta a la víctima, su familia y comunidad. Esta “*situación se agrava cuando el agresor es un agente estatal, por su posición de autoridad y por el poder físico y psicológico que puede ejercer sobre la víctima*”¹⁶. La Comisión y la Corte Interamericanas han sostenido que la violencia sexual contra las mujeres tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para ellas¹⁷. Así lo ha reconocido también el Consejo Europeo, al expedir la “*Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*”.

¹² Cfr. Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 228 y 229

¹³ Cfr. CIDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. *Mariana Selvas Gómez y otras. México*. 28 octubre 2015., párr. 344

¹⁴ Cfr. Corte IDH. *Caso Blake Vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; Corte IDH. *Caso Radilla Pacheco Vs. México*, Sentencia de 23 de Noviembre de 2009, párr. 161.

¹⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr.118 a 121.

¹⁶ Cfr. CIDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. párr. 346

¹⁷ CIDH. Informe No. 74/15, Caso 12.846. *Mariana Selvas Gómez y otras. México*. 28 octubre 2015 párr. 347. Cita: Informe No 53/01. Case 11.565. Ana, Beatriz y Celia González Pérez. México. 4 de abril de 2001. Párr. 45; Corte I.D.H., *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 313.

31. La Corte, en atención a la Convención de Belém do Pará ha señalado que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es “*una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres*”, que “*trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases*”¹⁸

C.3. Prohibición a la esclavitud y servidumbre como derecho convencional (Artículo 6) desconocido por Naira, pues aún en “Estados de emergencia”, el derecho es inderogable.

32. El numeral 12 y 13 de la E.H., prueba como las mujeres, niñas y las hermanas Quispe, fueron sometidas por un mes, a actos de esclavitud y servidumbre por parte de los militares de la BME., actos contrarios a la dignidad de las personas, la integridad física y psíquica más cuando se trata de niñas y mujeres. La Corte Internacional de Justicia precisó que en el derecho internacional contemporáneo la protección contra la esclavitud, y contra la discriminación racial, es una obligación internacional *erga omnes*, derivada “*de los principios y reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana*” y, por lo tanto, atañe a todos los Estados¹⁹.

33. El artículo 6 de la Convención equipara la “esclavitud y la servidumbre”, pues en los tres numerales y éste último dedicado al “trabajo forzoso u obligatorio”, lo subdivide casuísticamente en cuatro eventualidades, dentro de las que se ubican las realizadas por las hermanas Quispe en la BME donde fueron detenidas injustificadamente y sometidas a trabajos forzados, como “*lavar, cocina, limpiar diariamente*”, “*víctimas de desnudos forzados, tocamientos indebidos, tentativas de violación y violación sexual*”. La Corte, después de hacer

¹⁸ Cfr. Corte IDH. *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr.108. Id. CEDAW. Preámbulo.

¹⁹ Cfr. Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya, *Caso España Vs. Bélgica*. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Sentencia de 5 de febrero de 1970, p. 103, párr. 33.

un breve resumen internacional de la evolución de esta prohibición universal de ser sometida una persona a cualquier forma de esclavitud o servidumbre, sostiene que de conformidad con el art.27.2 de la Convención, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, hace parte del núcleo esencial e inderogable de derechos, “pues no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas”. Así mismo, recogiendo una definición en sentencia anterior (Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia), la Corte manifiesta que expresión “trabajo forzoso” *u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente*²⁰.

C.4. Privación de la Libertad (Art. 7 de la Convención) de las hermanas Quispe con falsas acusaciones. La prescripción de la acción penal para desconocer el acceso a la justicia convencionalmente es inocua, cuando hay violación grave de Derechos Humanos.

34. Al tenor del numeral 12 de la E.H., las hermanas Quispe fueron privadas de la libertad, sin los requisitos de forma y fondo de las leyes vigentes en Naira. La Corte ha señalado que “*con la protección de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas mínimas de protección legal*”²¹

35. Los procedimientos internos abiertos en el presente caso no han constituido recursos efectivos para garantizar un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas, “*dentro de un plazo razonable*”²², que abarque el esclarecimiento de los hechos, la investigación y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las violaciones a la vida e integridad. La

²⁰ Cfr. Corte I.D.H., *Caso de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de Octubre de 2016. Serie C No. 220. Párr. 243.

²¹ OEA/Ser. L/V/II. Doc. 67-18 octubre 2006. En: [http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaMujeres06sp/ indice mujeres06sp.htm](http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaMujeres06sp/indice/mujeres06sp.htm)

²² CIDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. *Mariana Selvas Gómez y otras. México*. 28 octubre 2015., párr. 405 a 411

Corte sostiene que “*el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana es la protección de la libertad del individuo contra toda interferencia arbitraria o ilegal del Estado*”²³ y más cuando lo realizan agentes del Estado de la BME. La ONG Killapura en Marzo 10 de 2015, evidenció con pruebas suficientes y denunció el caso de las hermanas Quispe, por violencia sexual, pero el Estado de Naira no permitió el acceso a la justicia con recursos y procedimientos idóneos para esclarecer la verdad en un plazo razonable e idóneo, pues argumentó la prescripción de 15 años desde que ocurrieron los hechos en la BME. Si bien la prescripción en el derecho interno, limita el poder punitivo del Estado, la jurisprudencia constante y uniforme de la Corte, ha sostenido que “*la prescripción de la acción penal es inadmisibles e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional*”²⁴. En tal virtud, si el Estado propone como excepción la prescripción de la acción penal en el derecho interno, será declarada infundada, como reiteradamente lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte²⁵

C.5. En el caso Quispe se han violado los derechos convencionales (Arts. 8 y 25) del debido proceso penal, investigación imparcial, eficaz e idónea y de juzgamiento de los responsables agentes del Estado y del no agente Jorge Pérez, como ex pareja de María Elena Quispe. Así mismo, por suspender derechos convencionales en “Estado de emergencia” en contravía del artículo 27.2 y 25 de la Convención.

36. Desde la entrevista de Mónica Quispe para el canal de Televisión GTV en diciembre de 2014 y la denuncia del caso Quispe por Killapura (numerales 12 y 18 de la E.H.), el Estado no ha iniciado ni promovido investigación penal alguna, argumentando la prescripción de la acción

²³ Cfr. Corte IDH. *Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador*. ...párr. 131

²⁴ Cfr. Corte IDH. *Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador*. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr.111

²⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162., párr.180

penal en el derecho interno y que anteriormente se sostuvo era infundada y abusiva en el derecho internacional, pues el caso *sub examine* es de aquellos que ingresan al *ius cogens* por atentar gravemente a derechos humanos, reconocidos y garantizados por el derecho internacional.

37. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Parte están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (Art. 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (Art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Art. 1.1)²⁶. La violación sexual realizada por militares “no guarda relación con la disciplina y la misión castrense”, por el contrario los actos cometidos por los militares afectó a “*bienes jurídicos tutelados en el derecho interno y la Convención americana como la integridad personal y la integridad de la víctima*”²⁷ y con graves repercusiones psíquicas y morales a los familiares de las víctimas, más cuando se les ha negado el derecho al acceso a la justicia, una investigación imparcial e idónea y el esclarecer la responsabilidad de los agentes del Estado (Militares) o no agentes (Jorge Pérez) y “a obtener las consecuentes reparaciones... todo ello en un plazo razonable... Es decir que los juzgadores deben “*actuar en forma diligente, procurando la celeridad en la tramitación de los procesos*”²⁸

38. Los hechos presentados y probados en el caso *sub examine* (núm. 8 a 10,12, 15, 18, 21 y 22) “perpetradas en un contexto de ataque generalizado y sistemático contra sectores de la población civil”, son considerados como “*crímenes contra la humanidad*” y por eso frente a la gravedad de las conductas o hechos punibles, la importancia para investigar, juzgar y sancionar a

²⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de agosto de 2008 Serie C No. 181, párr. 381

²⁷ Cfr. Corte IDH. *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 177

²⁸ Cfr. Corte IDH. *Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C No. 306, párr. 132

los responsables sean agentes del Estado o realizados por particulares, la naturaleza de los derechos lesionados, la Corte ha reconocido reiteradamente el carácter *ius cogens*²⁹.

39. La falta de debida diligencia en el proceso de investigación y en la preservación de evidencia esencial, sin la cual los procesos judiciales no podrían llevarse adelante, caracteriza una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, sobre todo en casos como el *sub examine*, en el que las autoridades deben actuar de oficio e impulsar la investigación, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los particulares³⁰. El Estado no ha ofrecido una explicación satisfactoria respecto a la excesiva prolongación de la investigación en el caso de las hermanas Quispe. No es suficiente con que existan los recursos, códigos penales o normas referidas a un proceso jurisdiccional, sancionatorio o disciplinario, sino que se aplique real, eficaz y efectivamente, “*para respetar el debido proceso legal*”³¹

40. “*Tanto la Comisión como la Corte han señalado en su jurisprudencia reiterada que el deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. Es así como la investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, y estar orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos*”³²; todo ello, para evitar la impunidad de los

²⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173. párr. 377

³⁰ AA.VV. *Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación*. Comisión interamericana de derechos humanos. OEA/Ser. L/V/II. 2011. Caso ídem, párr. 69

³¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Flor Freire Vs. Ecuador*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315. párr. 164

³² Cfr. CIDH, Informe No. 74/15, Caso 12.846. Fondo. *Mariana Selvas Gómez y otras. México*. 28 octubre 2015, párr. 377

autores de las conductas o hechos delictivos sexuales, de violencia de género, vejámenes, hechos de tortura o cualquiera otra actividad delictiva que afecte la integridad física, psíquica y sobre todo la dignidad humana de niñas y mujeres principalmente.

41. Por las razones anteriores, el Estado es responsable por el incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia³³ y a conocer la verdad, contenidos en los derechos a las garantías judiciales, protección judicial, “recursos judiciales efectivos”³⁴ en los términos de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

42. Así mismo, se considera que Naira desconoció el contenido del artículo 25.1 en conexión con el artículo 27. 2 de la Convención, cuando el Estado decretó el “Estado de Emergencia”, durante el período 1980-1999 y suspendió las derechos y garantías constitucionales en contravía del artículo 22 de la Constitución de Naira (núms. 2 y 5 E.H.) y la postura reiterada de la Corte en sus Opiniones Interpretativas, las cuales sostienen que en estos Estados de Emergencia o Excepción (Estado de Guerra, Conmoción Interior o Emergencia, económica, social o ecológica), no se podrán suspender derechos convencionales (Arts. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, 20 y 23) “*ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos*”, es decir, “*aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo (27.2) y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud*”, “*o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención*”³⁵.

³³ Cfr. CIDH, Informe No. 4/16, Caso 12.690, Fondo, V.R.P y V.P.C, Nicaragua, 13 de abril de 2016, párr. 85

³⁴ *Ibíd.*, párr. 100

³⁵ Cfr. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 18, 20 y 41

C.6. Violación del artículo 7 de la Convención Belém Do Pará en relación con el artículo 1.1., de la Convención: Violencia selectiva, generalizada y de contexto contra la Mujer en Naira por sus agentes y no agentes o particulares

42. El Estado de Naira, en las tres etapas de las líneas del tiempo presentadas en la E.H., se presentó una violencia selectiva (en contra de las hermanas Quispe y Analía Sarmiento), generalizada (niñas, mujeres y grupos LGTBI) y de contexto (Estadísticas del Ministerio Público y el INE). Diversas formas de Violencia: sexual, de género, hechos de tortura, discriminación de la mujer y contra la integridad física, psíquica y la dignidad de las mujeres. La aplicación e interpretación sistémica de la Convención Belém do Pará, como un *corpus iure* total se impone frente a cualquiera otra posible, tal como la Corte en otros casos emblemáticos lo ha hecho³⁶

43. Según la Convención de Belém do Pará, y la reiterada jurisprudencia de la Corte, se tiene *“la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno”*³⁷.

Y eso, precisamente fue lo que les ocurrió a las niñas, mujeres y las hermanas Quispe en Marzo de 1992, cuando fueron privadas de la libertad inconsultamente y recluidas en la BME (núm. 12 y 13 de la E.H.). La Corte, ha reiterado, que *la violación del derecho a la integridad física y psíquica de las personas tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según factores endógenos y exógenos de la persona (duración de*

³⁶ Cfr. Corte IDH. *Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 43 y 44

³⁷ Cfr. Corte IDH. *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333., párr. 246

*los tratos, edad, sexo, salud, contexto, vulnerabilidad, entre otros) que deberán ser analizados en cada situación concreta”*³⁸

44. Los Estados suelen dar justificaciones variopintas sobre porque no iniciaron las investigaciones penales correspondientes en el derecho interno para no dejar en la impunidad las conductas o hechos delictivos como los que se presentan en el caso *sub lite* de las hermanas Quispe, tales como no poder iniciar investigaciones de oficio por requerirse denuncia de las víctimas, alegar impedimentos para iniciar la investigación o porque las víctimas no denunciaron los hechos en un plazo prefijado en la ley, o porque incluso ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal como lo alegó Naira y *ut supra* quedó desechada por infundadas razones en el derecho Internacional. Respecto a la justificación que también planteo Naira, de no iniciar una investigación por cuanto la víctima María Elena Quispe no denunció los hechos en señaladas en el numeral 18 de la E.H., pero sí lo hizo su hermana Mónica Quispe (núm. 10 E.H.), pero el “*proceso judicial sigue pendiente*”. Al respecto, la Corte ha “*advertido que para que surja la obligación de investigar no es necesario que la presunta víctima denuncie los hechos más de una vez. Lo que es más, en casos de alegada violencia sexual, la investigación debe intentar evitar en lo posible la re victimización o re experimentación de la experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido*”³⁹. Por segunda vez, denunció Killapura, el caso Quispe en Marzo 15 de 2015 y aquí Naira argumentó la desechada prescripción de la acción penal. Por tanto, el Estado reiteradamente incumplió la Convención en su artículo 1.1 en conexión con el artículo 7 de la Convención Belém Do Pará, por desatender las denuncias sobre violación de derechos humanos en la mujer, tanto por acción como por

³⁸ Cfr. Corte IDH. *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*. 2017. párr. 250

³⁹ Cfr. Corte IDH. *Caso J. Vs. Perú*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013 párr. 351. *Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México*, supra, párr. 196; y *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México*, supra, párr. 180

omisión, recurriendo a obstáculos formales y vulnerando flagrantemente el derecho sustantivo de las personas que sufrieron toda clase de vejámenes, trato cruel degradante e inhumano.

45. En efecto, tomando en cuenta la Convención de Belém do Pará, la Corte ha señalado que la violencia contra la mujer no sólo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es *“una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”*, que *“trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases”* (CEDAW, preámbulo). Por eso, en aquellos Estados como Naira, donde se presentaron casos en investigaciones de violencia contra la mujer en contexto y las específicas como las de las hermanas Quispe y Analía Sarmiento, aquellos Estados tienen unas obligaciones generales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención, reforzadas y complementadas por las obligaciones establecidas en el artículo 7.b., de la Convención Belém do Pará, la cual obliga a los Estados Parte, a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como para investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7.c)⁴⁰

⁴⁰ Cfr. Corte IDH. *Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339., párr. 149

VI.

REPARACIONES

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

50. Al tenor del artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha manifestado que “*toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente*”⁴¹, y conforme al derecho convencional ratificado por los Estados parte.

A. Víctimas Lesionadas: Indígenas María Elena y Mónica Quispe

51. Reconocidas como víctimas las partes lesionadas en el caso *sub examine*, María Elena y Mónica Quispe, y demostrado en el aparte V, Análisis legal, Aspectos de fondo (literales A a, C y C.1 a C.6) en el presente memorial, se solicita respetuosamente a la Corte sean reparadas en forma integral en lo que a continuación relacionamos:

B. Obligación de investigar la tentativa de feminicidio de María Elena Quispe y de violencia sexual de las hermanas Quispe

52. El Estado de Naira y sus Autoridades Judiciales competentes tienen la obligación de continuar la investigación según las circunstancias de modo, tiempo y lugar hasta su terminación con la imposición de la respectiva sanción, al responsable de la tentativa de feminicidio plenamente identificado como ex pareja de María Elena Quispe y que responde al nombre de Jorge Pérez, pues según la plataforma fáctica del memorial, núm. 10 E.H., “*el proceso judicial sigue pendiente sigue pendiente*”⁴²

53. Igualmente, el Estado y sus Autoridades Judiciales tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de tortura física y psicológica continuada en

⁴¹ Cfr. Corte IDH. *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 283; *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 233.

⁴² Cfr. Plataforma fáctica del Caso Hermanas Quispe Vs. Naira, párr. 25 y 26.

las mujeres y niñas, con perspectiva de género y comprobadas probatoria, estadística y en contexto⁴³ y particularmente “*sufrida [s] por...las hermanas Quispe en Warmi,...* [Porque] *estas no fueron tramitadas debido a que el plazo de prescripción de 15 años ha pasado*”⁴⁴, pues como *ut supra* se demostró, la prescripción del derecho interno en éste último caso, no excluye al Estado de su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de un hecho o conducta punible continuada (núms. 25 y 28 a 30 del aparte V, Análisis legal del caso).

54. En las anteriores peticiones de reparación, lo que el Estado de Naira y sus Autoridades judiciales, han violado las garantías judiciales y el derecho a la protección de las víctimas, por la indebida actuación, la indiligencia judicial y los plazos no racionales para asumir ese valor constitucional y propio de la costumbre internacional de la equidad y justicia con dignidad.

C. Rehabilitación de las víctimas de tortura en la modalidad de violencia sexual, vejámenes, privaciones de ilegales de la libertad, tratos degradantes e inhumanos. Aplicación del Protocolo de Estambul.

55. No existe prueba fehaciente en contrario, según la plataforma fáctica del caso *sub lite*, por el cual el Estado haya implementado políticas de salud física y psíquica a favor de las V.N. de violencia sexual continuada y demás tratos inhumanos realizadas por el Estado, muy a pesar de expedir exiguas medidas, normas de derecho interno y políticas a favor de la mujer, pero que no han sido implementadas total o parcialmente en la República. Por tales, razones, solicitamos respetuosamente a la Corte ordene, se aplique, vigile, controle y verifique la implementación integral de dichas políticas, tanto las pocas existentes y las nuevas aplicando los estándares de protección estatal y eliminación de toda forma de discriminación, violencia de género y sexual en la población de Naira; y sobre, todo se de aplicación al proceso investigativo de los hechos de

⁴³ *Ibíd.*, párr. 12.

⁴⁴ *Ibíd.*, párr. 33.

tortura previstos en el *Protocolo de Estambul*, para el caso de las hermanas Quispe y las niñas hoy mujeres V.N.

D. Reparación “per se” de la sentencia que se profiera por la Corte

56. La jurisprudencia internacional, ha reconocido que la sentencia de los organismos jurisdiccionales del ámbito internacional, constituye *per se*, “una forma de reparación”⁴⁵, por eso, reiteramos en nuestro *petitum* a la Corte, el reconocimiento de la responsabilidad de Naira, en el caso *sub lite* y ordene al Estado publicar la sentencia para conocimiento de toda la población del mundo y se reconozca públicamente a las víctimas de las atrocidades de todo, en acto público y en una placa conmemorativa de las V.N.

E. Garantías de justicia, reparación, no repetición y de no re-victimización de las V.N., y de sus familiares.

57. Respetuosamente solicitamos a la Corte, solicite al Ministerio Público y el Instituto Nacional de Estadística de Naira, sigan publicando las Estadísticas mensuales que desde 2014 hasta 2016 lo han hecho sobre feminicidios, tentativas de feminicidio, violencia de género y sexual contra la mujer y las niñas y la población LGTBI⁴⁶, pues eso ayuda a disuadir a los agresores (agentes y no agentes del Estado) de esta población con niveles de alta indefensión y vulnerabilidad. Así mismo, solicitarle a Naira aplique real, eficaz y con mecanismos de veeduría ciudadana, control de autoridades estatales de las tres ramas del poder público y de investigación y juzgamiento por parte de la rama judicial de todo acto de violencia de género y sexual y de implementación real de la “*Política de Tolerancia Cero a la Violencia de Género (PTCVG)*”, la puesta real y en marcha de la “*Unidad de Violencia de Género en la Fiscalía*” con fines “*de atención para las mujeres víctimas, además de capacitación y formación obligatoria para los*

⁴⁵ Cfr. Corte IDH. *Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017. Serie C No. 333, párr. 297.

⁴⁶ Cfr. Caso *María Elena y Mónica Quispe v. República de Naira*, párr. 12.

*jueces y fiscales y demás funcionarios y funcionarias ... [y] sancionar... [a quienes] cometan actos de violencia de género y discriminación”*⁴⁷

58. Igualmente se ordene a Naira la aplicación real y efectiva del “*Programa Administrativo de Reparaciones y Género*” creado para reparar “*a las víctimas de cualquier forma de violencia de género, priorizando los casos de feminicidio y violencia sexual... [previa] inscripción en el Registro Único de Víctimas de Violencia*”. La “*Comisión de la Verdad (CV)*”, creada en 2015⁴⁸, que debía ser la Comisión de la Verdad, la Justicia, Reparación Integral, no repetición y no revictimización. Ésta debe aplicarse a todas las víctimas y familiares de las víctimas del conflicto armado con fuerzas narco insurgentes como las V.N., y acaecidos desde 1970 hasta nuestros días.

59. En el ámbito legislativo, si bien Naira ha expedido la Ley 25253 “*contra la violencia contra (sic) la mujer y el grupo familiar*” que “*exige a la policía acciones urgentes de protección a las víctimas*”, éste debe eliminar aspectos formales como el “*atestado policial*” para la ley se aplique en su parte sustancial y proteja a las víctimas de todo tipo de violencia de género y sexual. Así mismo, el Código Penal de Naira y la Ley 19198 “*contra el Acoso callejero*”⁴⁹, deberán actualizarse a los nuevos estándares convencionales y normatividad internacional de protección a las mujeres y los grupos LGTBI y de eliminación, protección y prevención y sanción efectiva contra toda forma de violencia de género y sexual. Para ello, se deberá solicitarle al poder legislativo de Naira crear nuevas normas y Códigos que cumplan esos estándares de protección a la mujer, los niños, las personas en estado de indefensión y los grupos LGTBI.

⁴⁷ Caso *María Elena y Mónica Quispe v. República de Naira*, párr. 19 y 20.

⁴⁸ *Ibíd.*, párr. 22, 34 y 35.

⁴⁹ *Ibíd.*, Plataforma fáctica del caso (E.H.) núm. 14 y 24.

60. Sí bien Naira, es un Estado Monista y en el artículo Constitución 22 de la Constitución dispone que “*los tratados debidamente ratificados son directamente aplicables por los Tribunales y cuentan con un rango constitucional superior a las leyes nacionales*”, el derecho convencional, el *ius cogens* ratificado desde 1979 hasta la actualidad ha sido vulnerado como *ut supra* se ha demostrado (núm. 29 Aparte V), por eso se solicita a la Corte, conminar al Estado de Naira al cumplimiento de todos los Convenios ratificados por éste y solicite la aplicación al Protocolo de Estambul para María Elena y Mónica Quispe, por los hechos de violencia sexual que en el ámbito de contexto de Naira, constituyen una forma de tortura física y psicológica que ha producido secuelas y permanece en el tiempo.

61. La Corte, solicitará a Naira reanudar “*la investigación general y de contexto*”⁵⁰ de las V.N., de violencia de género, violencia sexual y tortura de Naira y en particular el caso penal hito de María Elena y Mónica Quispe, que aplicó la figura de la “prescripción de 15 años” del derecho interno, para no darle trámite al proceso, desconociendo la jurisprudencia reiterada de la Corte y el derecho Convencional señalado en el numeral 34 y 35 del Aparte V, Análisis del Caso.

F. Indemnización compensatoria a las víctimas María Elena y Mónica Quispe

F.1. Daño material

61. De la plataforma fáctica (párr. 23, 25, 26, 33), se infiere prueba de cargo contra Naira por el daño material ocasionado a las víctimas María Elena Quispe y Mónica Quispe, el cual deberá tasar y liquidarse conforme al derecho convencional.

F.2. Daño inmaterial

⁵⁰ Caso *María Elena y Mónica Quispe v. República de Naira.*, párr. 33

62. De la plataforma fáctica (párr. 23, 25, 26, 33), se infiere prueba de cargo contra Naira por el daño inmaterial ocasionado a las víctimas María Elena Quispe y Mónica Quispe, el cual deberá tasar y liquidarse conforme al derecho convencional.

VII.

PETITORIO

A. Declaratoria de Responsabilidad del Estado de Naira, por vulneración del Derecho Convencional y normas de Derecho Internacional y las normas del Derecho Internacional, precisadas en el punto V del análisis legal del caso

63. Honorables jueces de la Corte IDH, solicitamos con respeto declaren la responsabilidad estatal de la República de Naira, por la vulneración de los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 25°, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada en 1979 y año en el cual se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Transgresiones normativas en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

64. Se declare la responsabilidad de Naira, por la vulneración del artículo 1°, 6° y 8° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPTS), ratificada desde 1992 y en relación con el artículo 5.1 y 5.2., de la Convención Americana. Transgresiones normativas en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

65. Se declare la responsabilidad de Naira, por la vulneración del artículo 7° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o “Convención de Belém do Pará” ratificada desde 1996, en relación con el artículo 6.1 de la

Convención Americana. Transgresiones normativas en perjuicio de María Elena y Mónica Quispe.

66. Declarar infundada la excepción preliminar “*ratione temporis*” propuesta por la República de Naira, por cuanto la Corte IDH, sí es competente para conocer de las violaciones a las normas internacionales: La Convención, CIPTS, Convención Belém do Pará, en perjuicio de las hermanas Mónica y María Elena Quispe.

B. Incorporación al petitorio de las reparaciones solicitadas

67. Honorables jueces de la Corte IDH, solicitamos y como consecuencia de la Declaratoria de responsabilidad de Naira, sea condenado el Estado a la Reparaciones estipuladas *ut supra* en el numeral VI, literales A a F de éste memorial y sustentadas conforme al artículo 63.1 de la Convención.